Relaciones Iglesia-Estado (1988-1994). Una cara de la modernización

Nora Pérez-Rayón*

En el régimen del Presidente Salinas de Gortari se efectuó un viraje histórico en el campo de las relaciones entre las Iglesias con el Estado. La importancia de las instituciones eclesíásticas y la religiosidad del pueblo mexicano son reconocidas oficialmente. Como consecuencia, un nuevo marco jurídico normará las actividades de las instituciones eclesíásticas y sus vinculaciones con el gobierno y la sociedad.

Las modificaciones a la Constitución mexicana, que afectan a estas relaciones, no pueden entenderse sino como parte de un proyecto general de reforma del Estado. Dicho proyecto ha venido tomando cuerpo desde mediados de la

*Departamento de Sociología, UAM-A.

década de los ochenta, pero recibió un impulso fundamental a partir de la llegada al poder de Salinas de Gortari. Reforma con miras a impulsar un modelo de desarrollo económico de corte neoliberal, en el marco de un nuevo proyecto de modernización definido por el propio Presidente en los siguientes términos:

"La modernización es una transformación de nuestras estructuras económicas y del papel del Estado en ese cambio. Pero es igualmente esencial a la modernización, la modificación de las prácticas y la adecuación de las instituciones políticas. La reforma del estado hermana ambos propósitos con el interés de fundar en la corresponsabilidad y la solidaridad, las relaciones del estado y la sociedad."¹

El 1 de diciembre de 1988, en su discurso de toma de posesión, el nuevo mandatario definió al Estado moderno como "aquel que moderniza su relación con los partidos políticos, con los sindicatos, con los grupos empresariales, *con la Iglesia*".²

Una discusión sobre las relaciones Iglesia-Estado en México cubriría universos muy amplios; este artículo sólo se ocupa de analizar lo que a nuestro juicio constituyó el eje de la problemática y el cambio: la refuncionalización y redistribución de cuotas y espacios de poder entre la alta jerarquía eclesíástica católica y el gobierno salinista en el nuevo contexto nacional e internacional; lo que incluía una competencia fundamental en el campo de la cultura.

Una precisión: la Iglesia católica no es ni ha sido nunca una institución monolítica, para efectos del trabajo nos basamos en sus posiciones institucionales y nos ocupamos de la alta jerarquía eclesíástica que las expresa.

I. El contexto y la especificidad de los actores

Un rápido recuento histórico sobre las relaciones Iglesia-Estado en México, la creciente politización del episcopado nacional y la agresiva política vaticana de Juan Pablo II permiten ubicar la problemática que enfrentan en los últimos años el gobierno y la institución eclesíástica.

¹ C. Salinas de Gortari. "Reformando al Estado", en *Nexos*, 148, México, abril 1990, p. 31.

² Más de un 80% de la población se identifica como católico. Aun cuando los datos estadísticos sobre la adscripción religiosa son constantemente cuestionados particularmente por las iglesias y denominaciones religiosas no católicas que afirman contar con un número de adeptos mayor que el que aparece en las cifras oficiales, los datos del censo de 1990 aun cuando apuntan a un decrecimiento en el porcentaje católico de la población en relación a censos previos no hay discusión en cuanto a que sigue siendo la religión predominante con un amplio margen. Para ver cuadro comparativo de religiones y creyentes en México de 1970 a 1990 y distribución geográfica de los creyentes, ver J. L. Lamadrid. *La larga marcha a la modernidad en materia religiosa*, México, F.C.E., 1994, pp. 315 y 299.

El modelo político liberal que se impone en México en la segunda mitad del siglo XIX implicaba la supremacía del poder civil en la vida pública y la secularización de la sociedad. La legislación constitucional de 1917, no sólo ratificó los preceptos en materia religiosa de la Constitución de 1857 y las leyes de Reforma, sino que los radicalizó para limitar y controlar el poder y el campo de acción de la Iglesia católica (identificada con los enemigos de la revolución triunfante).

Esta legislación vigente formalmente hasta 1992 -es decir 75 años- negaba toda personalidad jurídica a las iglesias, privaba de derechos civiles y políticos a los ministros de culto, prohibía expresamente la crítica a las leyes y al gobierno, y toda ingerencia del clero en la vida política del país. Afianzaba el laicismo en la educación prohibiendo la enseñanza religiosa incluso en planteles educativos particulares. Ratificaba y ampliaba las disposiciones que impedían a la Iglesia adquirir, poseer o administrar bienes raíces y capitales, y reiteraba prohibiciones en torno a manifestaciones externas del culto.

Dicho marco jurídico -uno de los más restrictivos formalmente en vigor en países católicos- si bien provocó conflictos que llegaron a las armas en la década de lo 1920 con la Rebelión cristera, de hecho, y sobre todo desde fines de la década de 1930 ha sido en realidad "una ficción jurídica" que ha posibilitado una relación relativamente estable entre el Estado y la Iglesia católica. El famoso "modus vivendi" si bien marginaba a la Iglesia en el campo de la organización social y la participación política directa le permitía un amplio margen de acción en áreas vedadas por la legislación. El gobierno deja a la modernización con su secuela de industrialización, urbanización y educación laica, el proceso de secularización.³

El peso creciente de la Iglesia católica en el escenario político nacional -si bien se activa desde la década de 1960- se manifiesta con fuerza inusitada a partir de los años 1980, ante el deterioro de la economía del país y la erosión de la legitimidad del sistema político. La institución da pasos consistentes para asumir un liderazgo político expreso.⁴

Aunque con matices distintos, la jerarquía eclesiástica manifestó una actitud sumamente crítica respecto al gobierno y sus instituciones. Cuestionó la concentración del poder, el unipartidismo, el caciquismo, el fraude electoral, la corrupción, la falta de libertades y la democratización del sistema. También denunció -sin que fuera el eje de su discurso- la miseria y la injusticia social.

³ Ver M. Negrete. *Relaciones entre la Iglesia y el Estado en México 1930-1940*, México, El Colegio de México-UIA, 1988, y R. Blancarte. *Historia de la Iglesia Católica en México*, México, F.C.E., 1992.

⁴ R. Blancarte. *Op.cit.* También B. Barranco y R. Pastor. *Jerarquía católica y modernización política en México*, México, CAM-Palabra, 1989, y L. Guzmán, *Tendencias eclesiásticas y crisis en los años 80*, México, CESAS, 1990.

El discurso eclesiástico enfatiza las cuestiones morales y la pérdida de valores cristianos como causales fundamentales de la crisis política y económica del país.

Este comportamiento se evidenció particularmente en algunos procesos electorales regionales, y a nivel nacional en las elecciones presidenciales de 1988 en las cuales la institución se caracterizó por su discurso antigubernamental (aun cuando matizado en la cúpula) y por su constante presencia en los medios de comunicación de masas. En qué grado incidió en el voto de castigo al PRI es difícil de determinar.

La reforma del Estado mexicano se plantea entonces como una necesidad ineludible ante el agotamiento del modelo de desarrollo económico y la incapacidad del Estado para dar respuestas a la amplitud de las demandas de una sociedad en rápido proceso de crecimiento y transformación.

El régimen se avoca de inmediato a buscar apoyos consensuales para implementar tanto el proyecto económico como la crisis de legitimidad mediante alianzas renovadas y/o refuncionalizadas con diversos sectores e instituciones sociales, y entre ellas paradójicamente con un actor históricamente ubicado del lado de la tradición y no precisamente entusiasta de la modernidad y sus valores: la Iglesia católica.

La Iglesia católica mexicana en la década de 1980 va manifestando en forma sistemática, clara y concreta sus objetivos para impulsar el proyecto cultural católico e incrementar su presencia en la sociedad civil.

En primer término se exigía modificar el marco jurídico constitucional, en particular obtener el reconocimiento jurídico, el acceso legalizado a todos los niveles de educación, tener una mayor ingerencia en medios de comunicación de masas, y abrir canales legales y legitimados de participación y expresión política.

Por otra parte, para la alta jerarquía eclesiástica controlar y disciplinar el complejo y heterogéneo entramado institucional que constituye al conjunto de la Iglesia católica, devino en los ochenta un objetivo prioritario. El autoritarismo que caracteriza a la institución deja ciertos espacios de negociación que han permitido la expresión y la práctica de sectores eclesiásticos que no coinciden con las directrices centrales. En particular, después del Concilio Vaticano II las diversas lecturas sobre el papel y la relación de la Iglesia con la sociedad dieron lugar, en México y América Latina, a posiciones encontradas y conflictivas en el seno de la institución.

Para enfrentar y disciplinar esas tendencias cuestionadoras el Delegado Apostólico Monseñor Girolamo Prigione, desde su llegada a México en 1988, asume una cada vez mayor

intervención en la gestión tanto intraeclesial como en la relación Iglesia-Estado. Como parte de su estrategia va apoyando e impulsando a los obispos más conservadores.⁵ Se observa el fortalecimiento de tendencias tecnocráticas en el nivel de la jerarquía: son los obispos con mayor preparación académica y experiencia administrativa los que ascienden más rápidamente.⁶ Se apunta también el renovado interés por el establecimiento de relaciones diplomáticas con el Vaticano.

La Iglesia católica se enfrenta a la expansión de denominaciones y movimientos religiosos no católicos; las llamadas sectas desafían su cuasimonopolio en importantes regiones rurales y urbanas. De ahí el interés de la institución por mantener y reforzar constantemente en la memoria colectiva, la identificación en México de los conceptos de nación y patria mexicanas con catolicidad y guadalupanismo.

A las viejas demandas históricas la Iglesia agrega una novedosa: se une al clamor generalizado por *la democracia* y asume un discurso donde la defensa de los derechos humanos ocupa un lugar central. Lo que, cabe señalar, no se tradujo en un proceso democratizador al interior de la institución.⁷

Ese activismo no sería sin embargo comprensible, sin considerar la vinculación de mayor subordinación de la Iglesia católica al Vaticano y su compromiso con el proyecto eclesial del Papa Juan Pablo II.

En una realidad internacional marcada por el fenómeno de la globalización, la crisis y caída del socialismo, el ascenso de fuerzas y corrientes ideológicas conservadoras y el cuestionamiento de todos los parámetros ideológicos y las utopías, han transcurrido los 17 años del pontificado de

⁵ Girolamo Prigione llegó a México en 1988. A lo largo de estos años se fortaleció la alta jerarquía eclesial vinculada a Monseñor Prigione (nombró a 10 de los 14 arzobispos y al 80% de los nuevos obispos) y a las directrices conservadoras del Vaticano y desplazando al clero más ligado con trabajos de base y más comprometido con causas populares). Si bien la figura del Arzobispo Primado de México, Ernesto Corripio Ahumada, ha ejercido un cierto contrapeso al poder del Nuncio, con el transcurso de las negociaciones éste se convierte en interlocutor privilegiado del gobierno y asume cada vez más la representatividad de la jerarquía católica mexicana.

⁶ Ver V. Ramos. "Poder, representación y pluralidad en la Iglesia", Ponencia del V Encuentro Nacional Estado, Iglesias y Grupos Laicos.

⁷ Para una discusión sobre religión, iglesias y democracia ver el conjunto de artículos del libro coordinado por R. Blancarte. *Religión, iglesias y democracia*, México, La Jomada-UNAM, 1995. En el texto de V. G. Muro se sugiere que la inclinación de la Iglesia católica a demandar la democratización del sistema político tiene su base en el recambio de sus cuadros internos y en su interacción con algunos movimientos sociales, V. G. Muro. "Iglesia, movimientos sociales y democracia", en R. Blancarte (coord.), *Religión, iglesias y democracia*, México, UNAM-Porrúa, 1992, pp.181-199.

Juan Pablo II. Su llegada a la silla de Pedro en el Vaticano, en octubre de 1978, implicó para la Iglesia católica un proceso de redefinición de pautas de gobierno, doctrina y pastoral.

De la lectura de discursos y documentos oficiales del Sumo Pontífice, así como del seguimiento de su praxis política se perfilan como objetivos de su gestión los siguientes:

- a) Fortalecer la unidad de la Iglesia católica amenazada por fuerzas centrífugas: a través de un conjunto de medidas políticoadministrativas y doctrinales que centralizaban la autoridad y defendían la ortodoxia. Aquí el origen y el contexto cultural en que se formó Juan Pablo II, marcado en términos eclesiásticos y políticos por el autoritarismo, incidirían en su praxis y en un ejercicio de claridad, obediencia y disciplina frente a posturas de discrepancia, especulación y experimentación.
- b) Alentar y apoyar una mayor presencia vaticana en el mundo, e impulsar el fortalecimiento de las Iglesias católicas en su ámbito nacional
- c) Fortalecimiento de la cultura católica como proyecto de vida universal ante los embates de la secularización y la expansión de Iglesias y sectas religiosas no católicas.
- d) Luchar contra el marxismo y los regímenes de los países del socialismo real, deslegitimación y marginación de la Teología de la Liberación
- e) La denuncia del neoliberalismo como responsable de las grandes desigualdades entre los países ricos y pobres, así como por las desigualdades al interior de la sociedad, con su secuela de pobreza y marginación; se reprueban de la modernidad su fomento al consumismo y al hedonismo. Se hace un llamado a la **solidaridad** tanto a nivel individual como social y estatal para afrontar esos retos.
- g) Apoyo a la Doctrina Social de la Iglesia como tercera vía ante el fracaso de los sistemas capitalista y socialista
- h) Defensa de la tradición y la moralidad conservadora que incluye oposición a programas de planificación familiar, a la despenalización del aborto, a la eutanasia, a las relaciones sexuales fuera del matrimonio, al divorcio.

La cultura católica en la mira de Juan Pablo II se tradujo entre otras propuestas y documentos en la llamada "Nueva Evangelización", la promoción de la Doctrina Social de la Iglesia y el Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica.⁸ Con la Nueva Evangelización se pretende proyectar una nueva cultura católica que haga de los fieles, no sólo creyentes, sino militantes católicos que conozcan y participen activamente en la creación de un orden social cristiano, en el marco de una

⁸ Ver Juan Pablo II. *Catecismo de la Iglesia Católica*, IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. Santo Domingo. Nueva Evangelización, promoción humana, cultura cristiana, y N. Pérez-Rayón. "Iglesia católica y cultura. El discurso de la alta jerarquía eclesiástica en el nuevo contexto" en *México, una sociedad en cambio. Reflexiones sobre política y cultura*. México, UAM, 1994, pp. 75-158.

concepción integral de la vida del ser humano en la que no puede haber separación entre sus creencias religiosas privadas y su vida pública. La Nueva Evangelización pretende iluminar desde el Evangelio las mentalidades y actitudes ante el mundo actual. La Doctrina Social de la Iglesia se plantea como guía y respuesta a la problemática económico-social, y el Nuevo Catecismo como guía moral y espiritual del comportamiento y valores de esta cultura católica. Proyecto de-secularizador y de-laicizador.⁹

El carisma papal, la habilidad política del vicario polaco, los numerosos viajes internacionales y el uso intensivo de los medios modernos de comunicación de masas han caracterizado la nueva y exitosa cruzada. El actual Papa se ha convertido en un actor e interlocutor de primer orden en la política mundial, y desempeñó un papel importante en el derrocamiento de los regímenes comunistas de Europa oriental y en el proceso de deslegitimación del marxismo. Ha logrado mantener un alto grado de cohesión y disciplina en la jerarquía eclesiástica centralizando poder y afianzando posiciones doctrinales conservadoras.

En México, tanto la Iglesia católica como el Estado, se encuentran ante nuevos desafíos, aun cuando obviamente de distinta naturaleza y magnitud. En ambos casos enfrentan amenazas a sus respectivos cuasimonopolios en la vida religiosa y política; se ven con problemas para mantener la unidad y disciplina de sus cuadros dirigentes; y por diferentes canales están cada vez más asediados por fuertes reclamos de una sociedad civil más participativa ante el deterioro de sus condiciones de vida.

II. La negociación del nuevo marco iurídico (diciembre 1988-septiembre 1992)

a) Cronología de un complejo proceso cupular

Desde el primer día de su régimen Salinas de Gortari planteó la necesidad de una nueva relación con la Iglesia católica. Al interés expreso por modificar esta relación sigue el reconocimiento por el Secretario de Gobernación de que "la iglesia existe" y las declaraciones del propio Presidente "existe un hondo sentimiento religioso que hay que respetar y reconocer... la Iglesia tiene una

⁹ En virtud de que la laicización no es un proceso mecánico a ser imputado a fuerzas impersonales y abstractas sino que es el resultado de grupos de intereses opuestos el resultado es claramente un proceso no lineal y por tanto puede hablarse de procesos o momentos de laicización, de-laicización y re-laicización como han demostrado Richard Fenn, David Martin y el propio Dobbelaire. Dobbelaire, *Secularización, un concepto multidimensional*, México, UIA, 1994.

responsabilidad en el terreno espiritual. "Las connotaciones simbólicas que evocan estas expresiones de la clase política inician un proceso de rompimiento de tabus en la vida política mexicana".

Ante esta nueva actitud el discurso de la Iglesia católica cambió significativamente prevaleciendo una posición menos crítica, más tolerante y en particular de confianza hacia el nuevo Presidente, sin dejar de presionar en la ejecución de sus demandas. No obstante, a lo largo de 1989 el gobierno no concretó propuestas sobre el tema, la política de modernización económica y política se orientó hacia otros campos.

Es hasta febrero de 1990 con el nombramiento de un enviado personal del Presidente al Vaticano (Agustín Tellez Cruces) cuando se da el primer paso concreto. Éste es interpretado -al igual que un cúmulo de declaraciones y contradecaraciones que se publican entre 1989 y 1991 de funcionarios gubernamentales y eclesiásticos- como sondeos a la opinión pública, una pulsación sobre los efectos de las modificaciones en las relaciones de Iglesia Estado que se presumían generadoras de conflictos y divisiones.¹⁰

En mayo de 1990 el Papa visita México mostrando su gran capacidad de convocatoria y su habilidad política para presionar por un cambio en el estatus jurídico y el restablecimiento de relaciones diplomáticas. El episcopado nacional liderado por el Arzobispo de México, Monseñor Corripio Ahumada y el entonces Delegado Apostólico, Girolamo Prigione mantienen un solo frente.¹¹

Son los resultados electorales de 1991 que dan sólidos triunfos al Partido Revolucionario Institucional y refrendan la legitimidad que había logrado ganar el presidente Salinas, los que permiten, desde una clara posición de fuerza, que el Presidente anuncie en su Tercer Informe de Gobierno, el 1 de noviembre de 1991 la iniciativa de ley que concretará el proceso de negociación accediendo a la modificación del marco constitucional que venía normando las relaciones del Estado con las Iglesias desde 1917.

El Presidente, promotor fundamental de la reforma, lleva a través del PRI la discusión al Congreso. Se modifican los artículos 3,5, 24, 27 y 130 de la Constitución:

- A iglesias y agrupaciones religiosas que se constituyan como asociaciones religiosas se les reconoce personalidad jurídica.

¹⁰ N. Pérez-Rayón. "Con la Iglesia hemos topado Sancho. ¿Cambio o refuncionalización corporativista?", en *El Cotidiano* No. 35, México, UAM-Azcapotzalco, mayo-junio, 1990.

¹¹ Ver B. Barranco (coord.). *Más allá del cansma. análisis de la visita de Juan Pablo II*, México. Jus. 1990.

- Desaparece la prohibición a las corporaciones religiosas o ministros de cultos de intervenir en planteles de educación primaria, secundaria, normal y la destinada a obreros y campesinos.
- Los ministros de cultos, como ciudadanos, tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. No podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos de culto o en publicaciones religiosas oponerse a leyes del país y sus instituciones, ni rechazar los símbolos patrios.
- Podrán adquirir, poseer y administrar los bienes exclusivamente indispensables para sus fines.
- Mayor flexibilidad para las celebraciones y manifestaciones de culto externo.

El Estado posibilita con el reconocimiento jurídico y una nueva normatividad, la superación de una situación de simulación y propicia una mayor injerencia del clero en la sociedad, aún cuando se enfatiza la separación entre el Estado y las iglesias, el respeto a la libertad de creencias y se reitera el carácter laico del Estado.

El 28 de enero de 1992 se publican en el Diario Oficial las reformas a la Constitución aprobadas por todos los partidos con excepción del PPS (420 votos a favor, 22 en contra). El 16 de julio se publica la Ley Reglamentaria sobre Asociaciones Religiosas y Culto Público, la cual acota las reformas constitucionales garantizando la igualdad de todas las asociaciones religiosas en cuanto a derechos y obligaciones resistiendo presiones de Iglesia católica por obtener mayores privilegios.¹²

En el texto de la Ley Reglamentaria el Estado procura contar con mecanismos que le posibiliten el ejercicio de un control significativo sobre este actor socio-político: la Iglesia católica en primer término, y las otras instituciones religiosas. Así, se entiende la amplia discrecionalidad y la gama de funciones que se adjudican en la ley a la Secretaría de Gobernación (en relación con el reconocimiento a las asociaciones religiosas; a la obligatoriedad de presentar ante la misma la declaración de procedencia para la adquisición de bienes; su intervención para autorizar transmisiones religiosas en los medios de comunicación, etc.).

Las reacciones ante la Ley aprobada en la Cámara, si en general muestran por parte de la Iglesia católica el reconocimiento de un avance, se consideran insuficientes y restrictivas. Un sector importante de la institución que había mantenido sus reservas y su crítica al proceso de

¹² Para ver texto aprobado del Artículo 130 y Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, J.I. Lamadrid. *Op. cit.*, pp. 275-298.

negociación advierte (en documentos oficiales y de trabajo interno así como en declaraciones a los medios de comunicación) del peligro de que este nuevo marco legal subordine la Iglesia al Estado y limite considerablemente su libertad de acción y crítica, y la desvíe de sus propósitos de evangelización.

Una vez concluidas las reformas jurídicas de carácter nacional, prioridad del episcopado mexicano, una consecuencia natural fue el restablecimiento de relaciones diplomáticas de México con la Santa Sede en septiembre de 1992; prioridad del Nuncio Apostólico y objetivo importante de la estrategia política internacional del salinismo.

b) Balance de la negociación: ganancias y perspectivas de los actores en los acuerdos

Un proyecto de modernización a fines del siglo XX tiene necesariamente que reflejar la específica problemática espacial y temporal desde la cual se impulsa e incluir, por tanto, a ese actor político, social y cultural -la Iglesia católica para el caso de México- que por diversos motivos racionales e irracionales no sólo ha sobrevivido a la modernidad sino que es un factor presente tanto en las redes del poder como en la cotidianidad de masas de fieles.

Estudios y encuestas han demostrado que la religiosidad católica del pueblo mexicano no se expresa mecánicamente en comportamientos políticos y sociales dictados por sus dirigentes religiosos sea el clero nacional o el Vaticano.¹³ No obstante, también es incuestionable un cierto grado de influencia en esos campos de los líderes espirituales en amplios sectores de la población. Por su presencia a nivel local y regional, por la naturaleza de su liderazgo que implica una dimensión trascendental y de salvación, por la falta de canales alternativos de participación, las élites religiosas son factores reales de poder.¹⁴

Al respecto, la Encuesta Mundial de Valores puesta en práctica en una serie de países por la Universidad de Michigan arroja interesantes datos sobre las creencias y la participación de los mexicanos en el campo religioso. Entre otros:

— El 85% de la población ha tenido una formación religiosa.

¹³ En encuestas aplicadas por la Presidencia de la República en 1992 el 58.4% de la muestra no está de acuerdo en que la Iglesia participe en política y el 61.9% tampoco esta de acuerdo en que las iglesias tengan propiedades. Estos y otros indicadores pueden verse en los resultados de algunas encuestas aplicadas por la Presidencia de la República en Lamadrid. *Op. cit.*, 319 y ss. De ahí que se hable de una veta de anticlericalismo en la sociedad mexicana.

¹⁴ Ver R. Camp. "Las élites mexicanas, las élites religiosas, retrato mínimo" en *Vuelta*, No. 142. México, septiembre. 1988.

- El 75.9% está bautizado por la iglesia, el 81.8% se ha casado por la iglesia y el 80.8% ha manifestado interés en contar con servicios religiosos a la hora de la muerte.
- Tres de cada cuatro mexicanos respondieron considerándose muy religiosos, 23.1% medianamente religiosos y sólo un 2.3% se manifestó como no religiosos.
- El 34.3% de los habitantes consideran la religión muy importante, el 37.3% considerablemente importante y sólo para un 7% no tiene relevancia. Es decir para 7 de cada 10 habitantes la religión es un elemento sustancial en sus vidas.
- Con respecto al papel de la iglesia como proporcionadora de respuestas a ciertas áreas de la vida social el 64% de los mexicanos afirmó que su iglesia sí estaba dando respuestas adecuadas a los problemas morales y de la vida familiar y el 80% que sí proporcionaba respuestas adecuadas a las necesidades espirituales de las personas, pero sólo el 46.8% afirmó que su iglesia daba respuestas adecuadas a los problemas sociales que enfrentaba el país.

A nivel nacional (como lo demuestran las encuestas nacionales citadas anteriormente) no se trataba de responder a la demanda de una feligresía que reclamara la modificación del marco constitucional o las relaciones con el Vaticano. Esas demandas no se originaban en las bases sino en la cúpula de la jerarquía eclesiástica. Estos acuerdos se consiguieron fundamentalmente a través de *acuerdos cupulares* entre la Presidencia, por un lado, y por otro, la élite de la jerarquía eclesiástica: el Delegado Apostólico Monseñor Prigione y un grupo de importantes arzobispos y obispos de la Conferencia Episcopal Mexicana: Suárez Rivera, Posadas Ocampo, Reynoso Cervantes, y el Arzobispo Corripio Ahumada.

Entre los objetivos perseguidos con la reforma constitucional en materia religiosa por el gobierno salinista en el contexto nacional podemos señalar los siguientes:

La Iglesia católica se contempla, desde su perspectiva, como un aliado político y legitimador sumamente valioso a nivel nacional e internacional dadas las características de la coyuntura del país a fines de la década de 1980.

Aun cuando algunos analistas consideran que el gobierno sobredimensionó el poder de la Iglesia católica, el hecho es que se advertía en la década pasada, una presencia constante e incluso beligerante de la jerarquía eclesiástica en todos los foros y pronunciándose sobre todos los temas. Basta hacer una revisión de la gran prensa y de los documentos colectivos publicados por la Conferencia Episcopal Mexicana.

¹⁵ Información y porcentajes obtenidos a partir de los datos de la Encuesta Mundial de Valores implementada por la Universidad de Michigan en diferentes países en 1990.

El alto costo social del proyecto de modernización e integración en la economía mundial era previsible e innegable. Ante este panorama el gobierno se beneficiaría del *apoyo decidido de una jerarquía eclesiástica satisfecha y que a su vez controlase bien a sus bases*. Cabe recordar que a pesar de la disciplina eclesiástica las diócesis gozan de un amplio margen de autonomía. Tanto el Delegado Apostólico Prigione como el Presidente de la CEM se preocuparon por mostrarse ante la Presidencia como un grupo colegiado capaz de controlar al clero regular y secular de manera independiente a sus posiciones políticas y pastorales.

Ante el fuerte impacto de procesos macroeconómicos modernizadores, una doctrina católica que enfatice cuestiones de fe, doctrina y bienes espirituales deviene un gran apoyo, en tiempos de sacrificio de la microeconomía familiar, así como una alta jerarquía que enfatice espiritualidad y solidaridad.

Por otro lado, la reforma del Estado contemplaba una nueva propuesta ideológica legitimadora que se manifiesta expresamente en marzo de 1992 y que en puntos importantes se compaginan con el proyecto cultural vaticano.

Varios sociólogos de la religión señalan que los procesos de de-secularización pueden verse alentados cuando un sistema religioso proporciona un sistema de valores tradicionales alternativos frente a una élite minoritaria de corte liberal y puede contribuir a desacreditarla proveyendo a la oposición o a la sociedad de una fuente de unidad, y de racionalidad. *En tiempos de crisis política o de guerra el reforzamiento del consenso de valores es esencial*. Y agregan que entre más próxima sea la relación entre religión y cultura nacional -siendo vista la religión como la portadora, como la razón de ser o la justificadora de una cultura- lo más probable es que sea usada como una fuente de legitimación y reintroducida en la educación.¹⁶

Ante el desgaste del nacionalismo revolucionario se acude a *la reforma de la revolución* a través del llamado *liberalismo social* cuyas raíces históricas se remontan al siglo pasado. En esta plataforma ideológica, el nuevo Estado que construye el liberalismo social armoniza la libertad individual con las necesidades de la comunidad, es solidario con la sociedad y el individuo y promotor del bienestar porque regula los excesos del mercado sin invadirlo. En la renovación del discurso el concepto de *solidaridad* se sitúa en el centro. La democracia tiene como condición la justicia social.¹⁷

¹⁶ M. Dobbelaire. *Op. cit.*, pp. 49-50.

¹⁷ El liberalismo social se plantea como un tercer camino entre el capitalismo salvaje o el neoliberalismo y el estatismo o populismo. La herencia liberal europea, en su proceso de difusión en México, se transforma porque incorpora a su cuerpo doctrinario el agrarismo, la defensa de la soberanía, la liberación del trabajo y de la tierra, es decir, un liberalismo que adquiere un sólido contenido social.

Se concibe también un nuevo nacionalismo que conviviendo con la globalización sostenga la identidad cultural de la nación. En el objetivo del reforzamiento de la identidad cultural la Iglesia puede ser un colaborador por su papel histórico en la conformación del Estado y la nación. La religión cruza clases sociales y fronteras regionales aun cuando la religiosidad se viva de distinta manera en el norte que en el sur, en la ciudades que en el campo, la frase "todos los mexicanos somos guadalupanos" contiene una gran verdad en un sentido cultural.

Señala Víctor Ramos que el reforzamiento de los obispos como élite que busca relacionarse con otras élites constituía un fenómeno histórico habitual, lo novedoso en los últimos tiempos es que la búsqueda de la relación va siendo cada vez menos de los obispos hacia otras élites y cada vez más de las otras élites hacia los obispos. Lo cual es notorio en el caso de candidatos a puestos de elección popular o a algunos actos de gobierno. "Aparecer ligados a algún importante sector de la Iglesia reditúa en márgenes de credibilidad".¹⁸

Por último, pero quizás lo más importante en la mira del gobierno salinista: la legitimidad internacional. En un concierto mundial en que aun aquellos países más alejadas del Papado por razones históricas acuerdan estrechar vínculos con el Estado Vaticano, la situación de México se contempla como anómala. Modificar la legislación en materia religiosa se concebía como un paso más hacia la apertura de México al mundo interdependiente de fin de siglo, comparable quizás a la liberalización comercial.

La ofensiva del régimen en el ámbito internacional gana también con el reconocimiento y apoyo de un personaje como Juan Pablo II líder mundial de una Iglesia católica importante en el conjunto de fuerzas político-ideológicas a nivel mundial. El presidente Salinas se entrevistó con el Papa en tres ocasiones durante su sexenio, dos en México y una en Roma. El interés en cultivar esta relación fue patente.

Cabe destacar que en ese afán por el acercamiento con el Vaticano a lo largo del proceso de negociaciones el gobierno fue desplazando al Episcopado Nacional y haciendo de Monseñor Prigione el interlocutor privilegiado. Ese interés del gobierno mexicano es perfectamente correspondido por el Vaticano. México ocupa un lugar importante en su estrategia. Su Iglesia es rica y poderosa y puede desempeñar un papel de liderazgo en América Latina, el llamado "continente de la esperanza".

El reconocimiento jurídico de las instituciones religiosas así como de sus derechos y

¹⁸ V. Ramos. "Los obispos mexicanos y el reto de la democracia", en R. Blancarte. *Religión, iglesias y democracia*, p. 105.

obligaciones brinda a la Iglesia católica, como a las otras asociaciones religiosas, una mayor legitimidad y seguridad en la medida en que sus acciones se ajustan a la norma legal y al estado de Derecho. No más "espada de Damocles" suspendida frente a violaciones constitucionales aceptadas por gobierno y sociedad. El abismo entre la legislación y su aplicación constituía un problema de moral pública que debía superarse.

El Papado y el Episcopado mexicano, más que contemplar estos cambios en la perspectiva de la modernización o democratización, los entienden sobre todo como la rectificación de un error, la corrección de actitudes y documentos "persecutorios" que violan los derechos humanos. Se trata de una victoria simbólica de largo plazo, un triunfo de su autoridad moral.¹⁹

Su presencia en la sociedad civil se amplía potencialmente -a través de la educación y los medios de comunicación de masas- para impulsar el proyecto cultural católico y su visión integral de la vida donde no se separa al creyente del ciudadano. Su voz orientando a la feligresía sobre planificación familiar, asuntos de salud, ética sexual... o estrategias de votación puede asumir mayor resonancia y efectividad.

Aun cuando la Iglesia siempre ha hecho política a pesar de la Constitución y las limitaciones que le impone el Derecho Canónico, el nuevo marco constitucional le da mayor confianza no sólo para continuar orientando a los laicos en cuanto a sus opciones políticas, sino que la ha llevado a asumirse como la conciencia crítica y la salvaguarda de la moral de la nación.

Las reformas, si bien son consideradas insuficientes para garantizar la independencia y autonomía que persiguen frente al Estado, constituyen en general, a juicio de la alta jerarquía eclesiástica católica, un avance. Al haberse roto un precepto tabú suponen plausibles futuras modificaciones.

La crítica y oposición interna se presentó en ambos campos. Del lado del gobierno con una mayoría priísta de raíces liberales y jacobinas, y por el lado de la Iglesia católica, de sus sectores progresistas.²⁰ El fortalecimiento del presidencialismo en un caso y del Vaticano y su representante -interlocutor privilegiado del gobierno- en el otro fueron definitivos para el caso.²¹

¹⁹ Ver S. Loaeza. "México en la diplomacia vaticana", en *Nexos*, No. 149, México, mayo 1990, pp. 19-26.

²⁰ El Centro de Institutos Religiosos de la República Mexicana que agrupa entre otras a las órdenes religiosas de jesuita y dominica fue sumamente crítico frente al proceso de negociación cupular y sus resultados.

²¹ Para el seguimiento puntual del proceso de negociaciones y su interpretación ver R. Blancarte. *El poder, salimsmo e Iglesia católica (Una nueva convivencia Política mexicana)* México, Grijalbo, 1991; N. Pérez Rayón. "Con la Iglesia hemos topado, Sancho ¿Cambio o refuncionalización corporativista?" en *El Cotidiano* No. 35, México, UAM-A, 1990; "A la puerta de las modificaciones constitucionales sobre Iglesia-Estado" en *El Cotidiano* No. 45, México, UAM-A, 1992; "La Iglesia católica en la reforma del Estado: el Artículo 130 y su Ley Reglamentaria", en *El Cotidiano*; No. 50,

III. En el nuevo marco jurídico la Iglesia católica en 1993-1994

Para México los años de 1993 y 1994 constituyen un parteaguas que se inicia con el asesinato del Cardenal de Guadalajara, Juan Jesús Posadas Ocampo, en mayo de 1993, pasa por la difícil firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá a fines del mismo año, la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas desde enero del 94, el asesinato del candidato presidencial del PRI a la Presidencia, Luis Donaldo Colosio, en marzo siguiente, las elecciones presidenciales y del poder legislativo en agosto y el asesinato del Secretario General del PRI en octubre, para mencionar los eventos más sobresalientes; además para nuestro caso, la breve visita papal en agosto del 1993 a Yucatán.

Sin pretender hacer un registro pormenorizado de la reacción de la jerarquía eclesiástica frente a cada uno de estos acontecimientos destacamos lo que nos parece han sido las características y líneas de acción de la Iglesia católica frente a esta turbulenta realidad.²²

a) Conflicto, insurrección y crimen, marco electoral

A raíz del reconocimiento legal, las divisiones internas de la Iglesia, si bien no eran nuevas, se profundizan y se hacen públicas. La más importante, la que divide al ahora Nuncio Apostólico Girolamo Prigione y su círculo cercano del resto del Episcopado mexicano -con el Arzobispo Corripio Ahumada a la cabeza- que busca y logra recuperar espacios y poder frente al Estado, desplazando y aislando gradual, pero eficazmente, al Nuncio.

Es notorio el creciente y constante interés de los medios de comunicación de masas por hacer de la jerarquía eclesiástica un interlocutor privilegiado sobre todo tipo de problemas; así como el objetivo de la Iglesia católica por estar presente en todos los foros "orientando la opinión pública" y exigiendo a las autoridades el cumplimiento de obligaciones y demandas.²³

México. UAM-A. 1992. Para posiciones de los partidos políticos frente a reformas constitucionales ver M. E. García Ugarte. *La nueva relación Iglesia-Estado en México*, México, Nueva Imagen, 1993. V. M. Reynoso. "Los partidos políticos ante la democracia y la nueva presencia política de las iglesias", en R. Blancarte. *Religión, iglesias y democracia*, pp. 291-316.

²² Para un seguimiento de esta temática ver N. Pérez Rayón. "Iglesia y Estado ante el desafío de la credibilidad", en *El Cotidiano* No. 58, México, UAM-A. 1993; "La Iglesia católica, actor estelar en los nuevos acontecimientos políticos", en *El Cotidiano* No. 62, México, UAM-A, 1992, e "Iglesia católica y elecciones", en *El Cotidiano* No. 65, México, UAM-A, 1994.

²³ Soledad Loaeza recuerda cómo, por ley, durante años los obispos mexicanos callaron y señala que hoy que hablan se mira con nostalgia la época en la que su silencio hacía creer en su sabiduría, ya que ahora opinan de todo desde la política de deuda externa hasta los temas electorales pasando por todo aquello que haga las ocho columnas de los periódicos. "Los obispos se han convertido en auténticas vedettes de opinión pública" en S. Loaeza. "Que digan misa", en *Nexos*, 208. México, abril 1995, p. 12.

Si bien las críticas de la jerarquía eclesiástica a los costos sociales del sistema neoliberal se van acentuando y profundizando, la alta jerarquía eclesiástica mantuvo, en general, su respeto y apoyo al presidente Salinas de Gortari.

Aun cuando las relaciones entre esa jerarquía y el gobierno en 1992 eran excelentes no estaban exentas de tensiones. Por la naturaleza y objetivos de ambas instituciones, sus vínculos estarán siempre sujetos a diferencias y permanentes negociaciones.

Uno de los graves problemas asociados a la modernidad y que merece mención expresa es el del narcotráfico, por sus implicaciones en el orden económico, político, social y ético a nivel mundial y nacional. El asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en un enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes en el aeropuerto de Guadalajara, puso en la arena de la discusión los alcances de ese gravísimo problema en México y su penetración en las altas esferas del poder de orden público y privado, de las cuales ni la Iglesia católica ha estado exenta de sospechas. El esclarecimiento del caso ha dado lugar a fricciones y descalificaciones.

Para el sistema político mexicano, y para el presidente Salinas de Gortari en particular, la breve visita papal, fue una ocasión más para reafirmar su legitimidad a través del reconocimiento papal. El Vaticano en su cruzada cultural enfatiza la preocupación fundamental de la Iglesia por el avance de movimientos religiosos no católicos (alarmante sobre todo en la región del sureste). De ahí, el insistente llamado al pueblo mexicano para reavivar sus raíces cristianas y ser fiel a la fe católica que ha iluminado el camino de su historia.

La visita papal en agosto del 93 evidenció las profundas diferencias en el interior del Episcopado y su visión del país. Unos haciendo hincapié en los logros y avances, y otros -como el Obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz- en la pobreza, la violencia, la inseguridad y la injusticia. Al dejar México, el Papa expresó que pudo comprobar "cómo el pueblo de México va consiguiendo positivos logros en el desarrollo cívico e institucional".²⁴

El 1 de enero de 1994, el día que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, se produce un importante levantamiento armado en una región del estado de Chiapas, de fuerte base campesina indígena, perteneciente a la diócesis de San Cristóbal de las Casas. El movimiento denunciaba la opresión política y económica, y demandaba espacios democráticos y justicia social para las mayorías marginadas, en particular indígenas y campesinas; las exigencias eran tanto de carácter regional como nacional. El impacto del levantamiento

²⁴ Para una biografía de Samuel Ruiz ver Carlos Fazio. *El caminante*, México, Espasa Calpe, 1994. Para el problema de Chiapas y la presencia del factor religioso ver C. Tello. *La rebelión de las cañadas*, México. Cal y Arena, 1995.

chiapaneco en la opinión pública rebasó con mucho las fronteras y se convirtió en gran noticia internacional.

Samuel Ruiz, obispo de dicha diócesis desde hace más de treinta años, identificado con la Teología de la Liberación y la llamada Iglesia de los pobres, caracterizado por sus compromisos con las causas populares y su enfrentamiento con la oligarquía regional de ganaderos y cafetaleros así como con las autoridades, caciques y gobernadores, se convierte en un personaje clave en la comprensión y desarrollo del conflicto.

La Iglesia católica mexicana caracterizada por su sumisión al Vaticano da muestras, en el caso de Samuel Ruiz y Chiapas, de su vocación nacionalista herida por las intromisiones del Nuncio Apostólico y su papel protagónico y excluyente. El Episcopado mexicano cerró filas con el obispo Ruiz para frenar la versión de que la Iglesia, y en particular Don Samuel, eran cómplices o instigadores del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y resaltando su papel de mediador legitimado del conflicto.

Ante el problema de Chiapas la Iglesia se reafirma como un *actor político social de primera magnitud* ya que aun cuando es un sector minoritario y marginado el directamente involucrado, la Iglesia funciona como *corporación* y el obispo de San Cristóbal habla en nombre de toda la Iglesia.

Chiapas presenta un dilema para el Vaticano y su Nuncio en la medida en que de cierta manera *reivindica a la Teología de la Liberación* criticada, deslegitimada y perseguida por Juan Pablo II en América Latina, y fuertemente comprometida con un levantamiento armado de bases populares indígenas. (La influencia religiosa se evidencia en documentos y expresiones y es fruto de la acción de numerosos catequistas).

Con el caso Chiapas la Iglesia *fortalece su legitimidad identificándose con la pobreza y la marginación* aun cuando condena la vía violenta para la consecución de los fines. Reconoce las causas sociales del conflicto y pide solución pacífica y negociada, pero que atienda a las necesidades socioeconómicas y reclamos de justicia social y democracia.

El asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia, impactó a la Iglesia como al resto de la sociedad y fue condenado por todos sus sectores. Pero además de condenar el crimen, las voces del episcopado se expresaron en los mejores términos sobre la calidad y las cualidades personales y políticas del candidato del PRI. El asesinato propició críticas a la excesiva intromisión de la Iglesia en la vida pública. No faltó quien vinculara la violencia terrorista que acabó con la vida del candidato priísta con el alzamiento del EZLN y tratase de responsabilizar de la violencia hasta al propio Samuel Ruiz y sus catequistas chiapanecos. Posición sostenida por

quienes considerarían la necesidad de un endurecimiento de la política gubernamental, más dosis de autoritarismo y menos de negociación y concertación.²⁵

Si bien en el discurso de la jerarquía eclesiástica a raíz del levantamiento en Chiapas se acelera el proceso de críticas a la marginación económica, la desigualdad y los altos costos sociales del neoliberalismo y se demanda mayor justicia social y democracia, a raíz del asesinato de Luis Donald Colosio, en marzo, el tono del discurso cambia. A partir de ahí la Iglesia se alía con el régimen en la campaña por la reconciliación nacional y por la paz. Campaña que implícitamente devenía en apoyo al PRI y al PAN en la medida en que tanto el gobierno como el PRI e importantes medios de comunicación de masas proyectaban constantemente al PRD como propulsor de la inestabilidad y la violencia. (A lo cual no dejó de contribuir también un cierto discurso y comportamiento del propio PRD).

En este escenario se llevan a cabo las elecciones no sólo más competidas, sino también más vigiladas que ha confrontado el sistema político mexicano.

Ante los resultados que dan una amplia victoria a los candidatos del PRI, el Episcopado declara su satisfacción por la participación ciudadana e insta a los contendientes a aceptar los resultados. En fecha tan inmediata como el 22 de agosto de 1994, es decir al día siguiente de las elecciones, en un documento firmado por Adolfo Suárez Rivera y Ramón Godínez Flores, presidente y secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, la jerarquía católica "exhorta a todos los partidos políticos a reconocer y aceptar la voz del pueblo expresada copiosa y pacíficamente en las urnas". Se insiste en que es muy importante edificar la unidad de la nación, vigorizar las tradiciones morales de nuestro pueblo y mirar con confianza el futuro. "La pluralidad de partidos y tendencias tienen importancia para la unidad y, en cuanto representan proporciones definidas de la ciudadanía, deben ayudar a las autoridades que resulten elegidas, en el ejercicio equilibrado del poder. Así este se podrá mantener en sus justos límites." señala el texto episcopal.²⁶

El secretario de la Conferencia Episcopal Mexicana declaró a la prensa que la Iglesia católica vigilaría que Ernesto Zedillo, de llegar a la Presidencia, cumpla sus promesas de campaña para que este país tenga vida democrática.

²⁵ El régimen que había avanzado de manera consistente y comprometida en una reforma económica de corte neoliberal, coronando su esfuerzo con la firma del Tratado de Libre Comercio, se vio compelido a acelerar reformas en el campo político, fundamentalmente en la cuestión electoral, como producto de presiones de partidos políticos de oposición, movimientos organizados de la sociedad civil y desde luego del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas y las reacciones nacionales e internacionales que provocó.

²⁶ Ver *La Jornada*, 23 y 24/8/94 y *Reforma*, 27/8/94.

Aún cuando las críticas al sistema político no estuvieron ausentes, de hecho la Iglesia católica como institución, contribuyó sustancialmente a la legitimación del proceso electoral y sus resultados. Si bien la jerarquía católica señala irregularidades y menciona la desigualdad de recursos a disposición en las campañas, no hace de estos puntos un juicio descalificador del proceso electoral y sus resultados. Su discurso es alentador y optimista.²⁷

El PRI ganó y la jerarquía eclesiástica fue explícita y tácitamente una aliada circunstancial en ese triunfo. Si bien puede afirmarse que pagaba una deuda con el salinismo, defendía también sus propios intereses coyunturales y de mediano plazo, y su propia visión del momento histórico y sus posibilidades.

En las elecciones de 1988 se observaba una fuerte tendencia en el interior de la jerarquía eclesiástica a identificarse con el Partido Acción Nacional. En estas elecciones las preferencias del episcopado parecen haber estado más diferenciadas entre el PRI y el PAN, aun cuando un sector muy minoritario del mismo apoye al PRD. Una democracia bipartidista PRI-PAN pareciera ser el ideal de la mayoría de la jerarquía eclesiástica y el camino adecuado a la transición democrática.

Algunas reflexiones finales

El proyecto de modernización salinista incluyó como parte de su reforma del Estado una nueva relación con las iglesias y en particular con la católica, para lo cual se modificó una legislación vigente tres cuartos de siglo. El Presidente procedió tomando en cuenta el grado de tolerancia social ante una materia tan controvertida, cuidó los tiempos y marcó la pauta aun cuando el proyecto definitivo fue tomando cuerpo gradualmente.

Una Iglesia católica fortalecida ante la crisis económica y política del país y apoyada por el Vaticano impulsa demandas históricas y nuevas para legitimar jurídicamente su participación en la vida pública. El Estado Mexicano, la Iglesia Católica y el Vaticano encontraron un campo de

²⁷ El obispo Samuel Ruiz es nuevamente la nota discordante pero cautelosa del proceso. Se refirió al miedo por el cambio "sabemos que si una ciudadanía no alcanzó a tener la suficiente madurez para trascender el momento, no queda descargada de la responsabilidad histórica de ser sujeto de cambio, porque no son las autoridades las exclusivamente responsables de un avance histórico, sino la sociedad emergente que tiene sobre sí -antes y después de este momento- la responsabilidad de avanzar hacia un cambio definitivo, "Hubo irregularidades en las elecciones pero corresponde a la sociedad civil la resistencia y la protesta pacífica afirma Samuel Ruiz, y reiteró que el EZLN respaldaría las demandas de la sociedad civil en el contexto postelectoral, (*La Jornada*, 27 agosto, p. 19).

diálogo, objetivos complementarios o no contradictorios, y un mutuo interés en cambiar posturas históricas.

La Iglesia católica negocia -al margen de sus bases religiosas y laicas y sin hacer frente común con las asociaciones religiosas minoritarias- con la Presidencia de la República... Una ineludible reforma del Estado mexicano sobre premisas innovadoras de alto riesgo, con avances macroeconómicos en el marco neoliberal, pero con altos costos sociales llevaron a Salinas de Gortari al fortalecimiento del presidencialismo en aras de la gobernabilidad. Ello, a costa de avances sustanciales en el proceso democratizador: el proceso mismo de la negociación Iglesia-Estado fue una muestra. El gobierno marginó prácticamente del proceso negociador al conjunto de actores del campo religioso mexicano no católico y además negoció con la Iglesia católica, privilegiando al interlocutor internacional, sin sensibilidad por la pluralidad eclesial.

Las reformas constitucionales pueden verse como un paso democratizador en el campo de las libertades religiosas y los derechos humanos; pero la vía de negociación elegida fue cúpular, tradicional, vertical y autoritaria, y por lo tanto no moderna y transparente.

La negociación cúpular, y el significado y las consecuencias en la práctica de estas modificaciones pueden resolverse en el corto o mediano plazo, no necesariamente en un avance de la democracia real y de la tolerancia religiosa y la pluralidad, premisas sustanciales que estarían en la base misma de la modernización. Cabe recordar que la Iglesia católica como institución ha esgrimido la exclusividad de su Verdad, y no ha sido precisamente respetuosa y tolerante respecto a otras manifestaciones religiosas minoritarias.

Al adquirir derechos y obligaciones se propicia una mayor ingerencia de las iglesias en la vida pública en el terreno político, social y cultural, aun cuando el Estado mantiene mecanismos funcionales de control.

El Episcopado nacional ha recuperado -particularmente a raíz del caso de Chiapas- su posición de interlocutor privilegiado del Estado, pero las diferencias en su interior siguen actuando. Las evidencias parecen apuntar que la Iglesia católica está dispuesta a utilizar todos los espacios que la nueva legislación jurídica le da, para orientar a la opinión pública y contar con una mayor presencia social y política. En aras de intereses de carácter mundano corre el peligro de devenir un elemento inevitable de tensión y de disputa con el poder secular.²⁸

²⁸ G. de la Concha. *El fin de lo sagrado*, México, Alebrije, 1993, p. 112. Para este autor la paradoja reside en que la modernidad y la desacralización de la vida colectiva crean un vacío que la Iglesia intenta cubrir abjurando de su capacidad sagrada a través de tres mecanismos: fortaleciendo la presencia de su aparato en la vida civil-prensa, universidades, negocios; -a través de la difusión y refuncionalización de su doctrina social y- por medio de una

El nuevo marco jurídico, y el cambiante contexto nacional e internacional, han redefinido espacios de acción, mecanismos de interrelación y presión y, por lo tanto, cuotas de poder entre estos actores político sociales. Mas ello no significa el agotamiento del conflicto. La Iglesia católica tendrá que estarse continuamente redefiniendo ante una sociedad pluricultural -y cada vez más pluri-religiosa²⁹ y frente a una compleja transición política hacia una democracia por definir, y que como todas, está resultando larga y sumamente difícil.

actuación específicamente política. Y concluye señalando que hoy en México la Iglesia parece una organización supraestatal crítica, irresponsable, conducto de mecanismos no sacros: elecciones, opiniones sobre todo...

²⁹ La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público sacó a la luz el sorprendente -para todos- número de organizaciones religiosas presentes y actuantes en el país. Más de 3,000 han solicitado su registro para 1995 (de las cuales sólo una tercera parte están vinculadas con la Iglesia católica). Para un acercamiento a esta temática ver el texto *Las iglesias en el México de hoy*, resultado de un evento que convocó en 1994 a representantes y voceros de diferentes organizaciones religiosas a manifestarse sobre temas de carácter económico, político y social.